¿Por Qué Ni Trump Ni Los Demócratas Pudieron Generar Crédito Para La Reindustrialización en Lugar De Para La Flexibilización Cuantitativa (QE)?

Por: Miguel Santos García
Globalizacion, 06 de noviembre 2026

Región: EEUU
Tema: Política

El fracaso tanto de las administraciones republicanas como demócratas para dirigir la capacidad de creación monetaria del país hacia la reindustrialización en lugar de la inflación financiera de activos no es una historia de ambición insuficiente o mensajes deficientes, sino de captura estructural que ninguno de los partidos ha estado dispuesto o ha sido capaz de afrontar. La maquinaria de creación de crédito en Estados Unidos ha estado programada durante décadas para servir a los balances del sector financiero, y cada intento de redirigirla hacia las fábricas y cadenas de suministro se ha topado con el mismo muro de incentivos institucionales que premian la especulación de activos por encima de la inversión productiva. Este patrón se ha mantenido en coaliciones políticas tan diferentes debido a mecanismos específicos que derrotaron las ambiciones industriales de cada partido y a la lógica financiera más profunda que ninguno ha desafiado.

El esfuerzo de reindustrialización más ambicioso del Partido Demócrata, el paquete legislativo que comprende la Ley Bipartidista de Infraestructuras, la Ley de Reducción de la Inflación y la Ley CHIPS y Ciencia, desplegó subvenciones y créditos fiscales a una escala sin precedentes, pero operó enteramente dentro de la arquitectura financiera existente en lugar de transformarla. Entre 2021 y 2024, las inversiones anunciadas en la cadena de suministro de baterías y vehículos eléctricos en Norteamérica superaron los doscientos cincuenta mil millones de dólares, y la administración Biden pudo señalar compromisos genuinos de fabricantes de automóviles y baterías tradicionales que establecieron instalaciones en todo el Medio Oeste y el Sur. El problema era que estas subvenciones fluían a través de corporaciones cuyos propios incentivos seguían orientados a los rendimientos para los accionistas y la rentabilidad a corto plazo, más que en la formación paciente y a largo plazo de capital que exige una verdadera reconstrucción industrial.

Se esperaba que dos tercios de los fondos energéticos de la Ley de Reducción de la Inflación fueran destinados a las empresas, y los ejecutivos que habían pasado las tres décadas anteriores deslocalizando la manufactura no eran considerados adversarios, sino socios privilegiados a través de los cuales se lograría la reindustrialización. Este enfoque asumía que subvencionar al sector privado produciría naturalmente capacidad industrial, pero ignoraba el grado en que la corporación financiera se ha reestructurado precisamente para evitar compromisos fijos y márgenes más bajos de la manufactura. Los resultados fueron visibles en el sector de los vehículos eléctricos, donde el precio de entrada del Ford F-150 Lightning subió de unos cuarenta mil dólares en su lanzamiento a casi cincuenta y cinco mil a principios de 2024, ya que los costes de las baterías no disminuyeron y la demanda de los consumidores quedó por debajo de las previsiones que justificaban la inversión. Las subvenciones habían generado actividad, pero no una base industrial duradera, porque las decisiones de inversión seguían regidas por el mismo cálculo que había producido la

desindustrialización en primer lugar.

El enfoque de la administración Trump, en cambio, se basó en aranceles y restricciones migratorias como palancas para forzar la producción de vuelta al país, y se encontró con un conjunto de contradicciones aún más inmediatas. Los aranceles impuestos en 2025 no produjeron un auge manufacturero, sino que coincidieron con la desaparición de casi cien mil empleos en el sector manufacturero, mientras que el gasto en construcción en el sector manufacturero disminuyó de forma constante. La razón era perversa en su simplicidad. Los aranceles aumentaron el coste de los componentes importados y materias primas sin proporcionar ningún mecanismo compensatorio para que los productores nacionales obtuvieran crédito para su expansión, por lo que los fabricantes se enfrentaron a mayores costes de insumos y a una mayor incertidumbre en lugar de un camino más claro hacia la rentabilidad. La Asociación de la Industria de la Informática y las Comunicaciones advirtió que las políticas arancelarias de la administración aumentarían el coste de construir instalaciones de fabricación de semiconductores y la cadena de suministro de inteligencia artificial en cuatrocientos cincuenta mil millones de dólares entre 2026 y 2030.

Mientras tanto, las restricciones migratorias de la administración socavaron directamente la plantilla disponible para las plantas que afirmaba estar promoviendo. Un profesor de Stanford que anteriormente fue científico jefe en TSMC descubrió que solo el diecisiete por ciento de sus antiguos doctorandos trabajaban ahora en empresas que realmente fabrican microchips, mientras que el resto optaba por firmas de diseño, consultoras u otras industrias que ofrecían mejores salarios y condiciones laborales. La brecha laboral en semiconductores se estimaba en ciento cincuenta y siete mil personas, y sin una intervención específica la escasez retrasaría la puesta en marcha de plantas de fabricación, pero la coalición política de la administración trató la inmigración que podría cubrir esos puestos como una amenaza más que como una solución. Aranceles sin dirección crediticia y política laboral sin inmigración produjeron costes, inflación y retrasos, no reindustrialización.

Bajo estos fallos contrastantes se esconde una condición estructural común que el trabajo de Michael Hudson describe con precisión. Dos actores distintos crean los recursos financieros en cuestión, y el argumento del artículo gira en torno a mantenerlos separados. La Reserva Federal crea reservas, que son los pasivos que mantiene frente a los activos que adquiere, y los bancos privados crean crédito, que es el préstamo que realmente financia la inversión. En el sistema estadounidense contemporáneo, los bancos no crean crédito para la formación de capital industrial; prestan contra activos que ya existen, con el propósito de inflar los precios de bienes inmuebles, acciones y bonos. Esta no es una decisión política que pueda revertirse eligiendo cargos diferentes, porque está integrada en la estructura de incentivos de los bancos privados cuyos beneficios provienen de la apreciación del precio de los activos y la extracción de intereses en lugar de financiar nueva producción.

Cuando la Reserva Federal llevó a cabo la flexibilización cuantitativa tras 2008, compró bonos gubernamentales y valores respaldados por hipotecas a bancos, inundando el sistema financiero con reservas, y esas reservas fluyeron abrumadoramente hacia los mismos mercados de activos que los bancos ya atendían. Se suponía que el efecto de riqueza previsto se reflejaría en el gasto y la inversión, pero el resultado real fue una recuperación concentrada en los precios de las acciones y los valores de la vivienda, mientras que el empleo manufacturero seguía deprimido y la economía real recibía pocos beneficios. El análisis de Hudson explica que los cargos y comisiones por intereses desvian ingresos corporativos y poder adquisitivo del consumidor, haciendo que la producción industrial sea poco competitiva e inrentable, y que la única forma políticamente factible de

redirigir el crédito hacia fines productivos es poner la creación de dinero y la creación bancaria bajo control gubernamental. Ninguna de las partes ha estado dispuesta a contemplar esta socialización del crédito, porque hacerlo amenazaría directamente al sector financiero que financia campañas políticas y suministra al personal que forma las agencias reguladoras.

La persistencia de la flexibilización cuantitativa y los rescates como respuesta predeterminada a la crisis económica, en lugar de crédito dirigido a la industria, refleja una economía política más profunda en la que los intereses del sector financiero están estructuralmente privilegiados sobre los de los fabricantes y los trabajadores. Cuando el sistema bancario se bloqueó en 2008, el gobierno y la Reserva Federal intervinieron masivamente porque el colapso de grandes instituciones amenazaba toda la economía, y las herramientas desplegadas estaban diseñadas para estabilizar la infraestructura financiera en lugar de reconstruir la base industrial. La reindustrialización, en cambio, requiere una política fiscal sostenida y una orientación crediticia que esté sujeta a negociación política, pueda ser revertida por la próxima administración y exige un nivel de capacidad estatal que Estados Unidos desmanteló en gran medida durante cuatro décadas de gobierno neoliberal.

Así que el resultado es un equilibrio político en el que es operativa y políticamente más sencillo rescatar el sistema financiero cuando fracasa que emprender el lento y costoso trabajo de construir cadenas de suministro y formar a una mano de obra manufacturera. Los aranceles de Trump y las subvenciones demócratas representaron dos intentos diferentes de escapar de este equilibrio, pero ninguno abordó el mecanismo subyacente por el cual se crea y asigna el crédito. Hasta que los incentivos estructurales que favorecen los rendimientos financieros frente a la inversión productiva no se enfrenten directamente, la política económica estadounidense seguirá encontrando más fácil inflar los activos existentes que construir lo que aún no existe.

*

Miguel Santos García *es un escritor y analista político puertorriqueño que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el contexto de la cuarta revolución industrial, la nueva guerra fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog.*

Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG).

La fuente original de este artículo es Globalización
Derechos de autor © Miguel Santos García, Globalización, 2026

Comentario sobre artículos de Globalización en nuestra página de Facebook
Conviértase en miembro de Globalización

Artículos de: **Miguel Santos García**

Disclaimer: The contents of this article are of sole responsibility of the author(s). The Centre for Research on Globalization will not be responsible for any inaccurate or incorrect statement in this article. The Center of Research on Globalization grants

permission to cross-post original Global Research articles on community internet sites as long as the text & title are not modified. The source and the author's copyright must be displayed. For publication of Global Research articles in print or other forms including commercial internet sites, contact: publications@globalresearch.ca

www.globalresearch.ca contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available to our readers under the provisions of "fair use" in an effort to advance a better understanding of political, economic and social issues. The material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving it for research and educational purposes. If you wish to use copyrighted material for purposes other than "fair use" you must request permission from the copyright owner.

For media inquiries: publications@globalresearch.ca